



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 10 9 DIC 2020

Auto Interlocutorio No. _____

MAGISTRADO PONENTE: JHON ERICK CHAVES BRAVO

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2019-00348-00
EJECUTANTE:	JOSEFA GRANJA HURTADO Y OTROS
EJECUTADO:	NACIÓN – MINDEFENSA – POLICÍA NACIONAL
ASUNTO	AUTO RESUELVE NO REPONER

I. OBJETO DE LA DECISION

Procede el Despacho a resolver sobre el recurso de reposición interpuesto por la parte ejecutada contra el auto interlocutorio del 09 de julio de 2019, que ordenó librar mandamiento de pago a favor de la parte ejecutante.

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte ejecutada, en síntesis manifestó que el título ejecutivo contenido en la sentencia del 26 de agosto de 2015 proferida por el Consejo de Estado, no cumple con las exigencias del artículo 422 del CGP de ser clara, expresa y exigible¹ y por lo tanto no poder ser considerada como un título ejecutivo.

i) Indicó que la obligación no es expresa, toda vez que la referida sentencia se limitó a declarar administrativamente responsable al Estado por los perjuicios ocasionados, sin especificar en detalle y de forma cuantificable los dineros e intereses a cancelar, máxime cuando el artículo 424 ibídem dispone la ejecución por sumas de dinero, por lo que al no señalarse suma precisa o que se pueda liquidar por operación aritmética, el título no reúne los presupuestos legales.

ii) Argumentó que el título ejecutivo no es exigible, debido a que la parte actora no demostró haber cumplido con la obligación de radicar en debida forma la cuenta de cobro de la obligación conforme a lo establecido en el Decreto 768 de 1993 por medio de la cual se reglamentó el artículo 2, literal f), del Decreto 2112 de 1992, los artículos 176 y 177 del CCA y el artículo 16 de la Ley 38 de 1989.

¹ Ver folios 81 a 88

III. TRÁMITE

El recurso de reposición fue instaurado dentro del término legal, se corrió traslado del mismo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 319 y 110 del CGP, aplicables por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.

Durante dicho término, la parte ejecutante presentó escrito visible a folios 103 a 106 del expediente.

1.1 Argumentos de la parte ejecutante:

Manifestó en síntesis que, se opone a los argumentos del recurso, toda vez que dentro de la sentencia proferida por el Consejo de Estado se encuentran estipulados de manera clara, los valores que fueron reconocidos para cada uno de los demandantes, situación que la hace exigible por no estar sujeta a una condición para exigir su cumplimiento.

IV. CONSIDERACIONES

De conformidad con el artículo 430 del CGP, el recurso de reposición interpuesto contra el auto que libra mandamiento ejecutivo de pago, es procedente para debatir los aspectos formales.

El artículo 422 del CGP, estableció que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles y de forma consecuente, el artículo 430 ibídem, señaló que una vez presentada la demanda acompañada de documento que **preste mérito ejecutivo**, se puede librar mandamiento de pago en la forma solicitada por la parte ejecutante o en la que aquel considere legal.

Lo anterior, en armonía con lo establecido en el artículo 297 del CPACA el cual indica que constituyen título ejecutivo, las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

Así las cosas, tenemos que se pueden ejecutar i) las obligaciones claras, expresas y exigibles y, ii) aquellas que emanen del deudor o de una sentencia debidamente ejecutoriada.

El título ejecutivo debe contener dos requisitos esenciales, los de forma miran que el documento o documentos conformen unidad jurídica y que emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, de las providencias que en procesos contencioso



administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia. Las exigencias de fondo corresponden a que de estos documentos surja a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o del causante, una obligación clara, expresa y exigible.

1.1 Suma Determinable

En el presente asunto, la Policía Nacional alegó la inexistencia de una suma de dinero determinable que se pueda liquidar, no obstante, de la lectura realizada a la sentencia del 26 de agosto de 2015², proferida por el Consejo de Estado que revocó la sentencia de primera instancia³ [título ejecutivo], se evidencia que los perjuicios reconocidos están determinados en salarios mínimos, especificando cuantos salarios corresponden a cada uno de los actores, de manera que el argumento expuesto por el recurrente carece de fundamento, toda vez que claramente está determinada la suma de dinero de la obligación.

Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado⁴, ha señalado: «se infiere la regla general de la condena en concreto, hay dos formas para proferirla, bien de manera determinada con la indicación de una cifra matemática, o bien de forma determinable con la indicación de los factores para la determinación.»

Así pues, la sentencia objeto de recaudo puede contener una obligación derivada de una condena impuesta en concreto, que no fije una suma determinada, pero si determinable, indicando en forma precisa los factores para esa determinación, para lo cual es necesario la liquidación de la misma, por lo que a pesar de no haberse efectuado en la providencia la operación aritmética que arroje el monto a pagar, dicha circunstancia no la hace *per se* desconocer la obligación de pago.

Finalmente, no está de más destacar que las sentencias judiciales que ponen fin al proceso cuando acceden a las pretensiones, pueden impartir órdenes [al vencido] para el cumplimiento de obligaciones de dar⁵, hacer⁶ o no hacer⁷.

² Ver folios 31 a 53

³ Ver folios 9 a 28

⁴ Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente: Jaime Paredes Tamayo, Radicación número: 369, al resolver el 26 de septiembre de 1990, una consulta del Ministro de Hacienda y Crédito Público sobre: "cumplimiento de sentencias a cargo de la Nación", explicó la forma en que pueden darse las condenas en concreto: "... Las condenas en concreto pueden asumir dos formas, legalmente válidas, así: a) La sentencia fija un monto determinado por concepto de perjuicios; por ejemplo, condena a pagar \$ 1'000.000.00; y b) La sentencia no fija suma determinada, pero la hace determinable, bien porque su aplicación no requiere de un procedimiento judicial subsiguiente, con debate probatorio para el efecto; o bien, porque los elementos para esa determinación están fijados en la ley, tal como sucede con los salarios y prestaciones dejados de devengar por un funcionario o empleado público durante el tiempo que estuvo por fuera del servicio. ..."

⁵ Artículo 432 CGP

⁶ Artículo 433 CGP

⁷ Artículo 435 CGP

1.2 Reclamación ante la entidad y cesación de intereses

Argumentó la Policía Nacional que, la sentencia no es exigible debido a que la parte actora no adelantó la reclamación prevista en el Decreto 768 de 1993 por medio de la cual se reglamentó el artículo 2, literal f), del Decreto 2112 de 1992, los artículos 176 y 177 del CCA y el artículo 16 de la Ley 38 de 1989.

Al respecto, el Despacho advierte que de conformidad con el artículo 430 del CGP, el recurso de reposición es procedente contra el mandamiento ejecutivo de pago, únicamente para debatir los aspectos formales del título, situación que resulta ajena a la reclamación de pago que debe adelantar la parte actora ante la entidad, no obstante, debido a que la parte ejecutada confunde la exigibilidad de la sentencia [aspecto formal] con la reclamación de pago de la obligación [aspecto de fondo], se procederá a su aclaración.

El Decreto 768 de 1993, refiere en el numeral 3 "solicitud de pago"⁸, a la necesidad de acudir ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el cobro de las obligaciones dinerarias de sentencias condenatorias a la Nación, debiendo radicarse la solicitud de pago con los documentos pertinentes ante la Subsecretaría Jurídica.

De conformidad con lo anterior, resulta pertinente aclarar varios aspectos, el primero de ellos es que si bien el Decreto 768 reglamentó en su momento el artículo 177 del Decreto 01 de 1984, no es menos cierto que, de la lectura del trámite arriba citado y de la lectura integral del Decreto 768 de 1993, no se derivó consecuencia alguna frente al hecho de no adelantar la reclamación ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aunado a ello, y siendo el argumento más importante, se tiene que dicha reglamentación acaeció en el año 1993, pero de manera posterior, en el año 1998, el artículo 60 de Ley 446 adicionó el artículo 177 del Decreto 01 de 1984 indicado expresamente:

"Inciso. 6°. Adicionado. Ley 446 de 1998, art. 60. Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide de una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma."

En consecuencia, el nuevo inciso 6 dispuso: i) la necesidad de acudir a la entidad responsable de la condena, es decir, varió el sujeto al que se debe acudir para la reclamación, desdibujando del plano al Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

⁸ Artículo 3° SOLICITUD DE PAGO. Quien fuere beneficiario de una obligación dineraria establecida en una sentencia condenatoria a cargo de la Nación, o su apoderado especialmente constituido para el efecto, elevará la respectiva solicitud de pago ante la Subsecretaría Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante escrito presentado personalmente ante dicha Subsecretaría o con escrito dirigido a la misma, donde conste la presentación personal ante juez o notario, en la cual deberá afirmar bajo la gravedad del juramento que no se ha presentado ninguna otra solicitud de pago por el mismo concepto.

Radicación
Medio de control
Ejecutante
Ejecutado

76001-23-33-000-2019-00348-00
EJECUTIVO
JOSEFINA GRANJA HURTADO Y OTROS
NACIÓN - MINDEFENSA - POLICIA NACIONAL



5

ii) señaló un término preclusivo para instaurar la reclamación de 6 meses, circunstancia que antes carecía de término y; iii) introdujo una sanción ante la inoperancia del reclamante, consistente en la cesación de la causación de los intereses, así pues, en efecto el artículo 177 del Decreto 01 de 1984 fue adicionado en su contenido trayendo el nuevo inciso una causa - efecto respecto de los intereses, variación normativa que surgió 5 años después del Decreto 768 de 1993, lo que además genera la prevalencia de ley posterior para su aplicación.

Se advierte que la reclamación de que trata el artículo 177 del CCA, repercute en la causación o cesación de intereses, lo cual será objeto de verificación en el momento procesal oportuno, sin que ello tenga incidencia alguna en la exigibilidad, el cual es un aspecto que corresponde únicamente al título ejecutivo y que versa sobre no estar la obligación sujeta a plazo o condición al momento de la demanda ejecutiva.

Así las cosas y teniendo en cuenta que no se atacan los requisitos formales del título ejecutivo, no hay lugar a reponer la providencia recurrida, haciendo claridad que los argumentos acerca de los requisitos sustanciales del título se analizan en la etapa procesal subsiguiente, a través de las excepciones de fondo que proponga el ejecutado dentro del término legal correspondiente.

En consecuencia, se;

RESUELVE:

PRIMERO.- NO REPONER el auto interlocutorio del 09 de julio de 2019, que ordenó librar mandamiento de pago en favor de los ejecutantes y en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- EJECUTORIADA la presente decisión, continuar con el trámite procesal pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JHON ERICK CHAVES BRAVO
Magistrado

VaBo Secretario
Proyecto Andrés M.